

Provea alerta que persisten la incertidumbre y el temor en Las Claritas tras el operativo contra “Niño Guerrero”

La ONG Provea advirtió que, una semana después del operativo militar realizado en Las Claritas y Kilómetro 88, en el sur del estado Bolívar, continúan el temor entre los habitantes y la falta de información oficial sobre los hechos que rodearon la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como líder del Tren de Aragua.

De acuerdo con testimonios recopilados por la organización, las comunidades de la zona permanecen marcadas por la incertidumbre ante las consecuencias de la intervención y por la ausencia de detalles precisos sobre el desarrollo de las acciones militares.

El despliegue comenzó el pasado 9 de junio con sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y desalojos en áreas mineras que durante años estuvieron bajo influencia de grupos armados irregulares. Sin embargo, según Provea, los pobladores afirman que aún desconocen aspectos fundamentales del procedimiento, incluida la fecha exacta en la que habría fallecido el cabecilla criminal.

La organización señaló que el hermetismo de las autoridades ha contribuido a la circulación de rumores y versiones contradictorias sobre lo ocurrido, dificultando el acceso a información verificable para los residentes de la región.

Asimismo, destacó que las estructuras criminales que operaban en las minas habían consolidado durante años un sistema de control que incidía directamente en la dinámica económica local, generando una dependencia de actividades vinculadas a estos grupos.

Tras la operación, comerciantes y habitantes reportaron el cierre de establecimientos, la salida de numerosos trabajadores mineros y preocupación por posibles hechos de violencia o represalias.

También persisten interrogantes sobre el destino de otros líderes de organizaciones armadas que mantenían presencia en el sur del país.

Provea advirtió que la ausencia de políticas integrales para atender el fenómeno de la minería ilegal podría provocar nuevos desplazamientos hacia localidades cercanas, profundizando las dificultades sociales y económicas que ya enfrenta la región.

La ONG insistió en la necesidad de que las autoridades ofrezcan información transparente sobre los acontecimientos y adopten medidas que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades afectadas.

Monitoreamos